

# Capítulo VIII. El impulso y su freno 1983-1989

## La ilusión democrática

### Presidencia de Raúl alfonsín (1983-1989)



Raúl Alfonsín, asumió el 10 de diciembre de 1983. Luego de casi ocho años de interrupción democrática a manos de las Juntas Militares, terrorismo de Estado y vuelco total de la economía nacional desde los sectores de la producción y la industria a los de las finanzas y los servicios, y tras la guerra de Malvinas, se reiniciaba el camino de la normalización institucional. Como en 1916, la multitud que se volcó a las calles reflejando una victoria de la democracia, pero pronto la sociedad se dio cuenta de la resistencia de los vencidos sino que la UCR no era capaz de satisfacer la demanda de la sociedad que habían

acumulando años anteriores relacionados a los DDHH y la economía (que poco se habló en el discurso electoral) la economía se encontraba desde 1981 en estado de desgobierno y casi de caos: inflación desatada, deuda externa multiplicada y con fuertes vencimientos inmediatos, y un Estado carente de recursos, sin posibilidad de atender a los variados reclamos de la sociedad, desde la educación, salud hasta los de carácter salarial de sus propios empleados, y con una fuerte limitación en su capacidad para dirigir la crisis.

Esta incertidumbre sobre alfonsín y su capacidad de gobernar se extendía en los sectores fuertes comprometidos a la dictadura o salpicados por de derrumbe (los militares, la Iglesia, los empresarios, los sindicatos) y se encontraban sin una voz que los represente y en estado defensivo mientras que el peronismo vivía una crisis interna, por la derrota electoral, y busco atacar al radicalismo por varios frentes.

El poder que administraba Alfonsín era, a la vez, grande y escaso. El radicalismo había alcanzado una proporción de votos sólo comparable con los grandes triunfos de Yrigoyen o Perón y tenía mayoría en la Cámara de Diputados, pero había perdido en el interior tradicional y no controlaba la mayoría del Senado. Si el liderazgo de Alfonsín en su partido era fuerte, (UCR) constituía una fuerza dividida, donde se discutieron y se obstaculizaron muchas de las iniciativas del presidente, quien prefirió rodearse de un grupo de intelectuales y técnicos recientemente acercados a la vida política, y de un grupo radical juvenil: **la junta Coordinadora nacional** (llamada la coordinadora) que avanzó fuertemente en el manejo del partido y del gobierno.

El Estado que debía luchar con la oposición tampoco carecía de eficiencia y aun de credibilidad para la sociedad. Pero cuando asumió el presidente Alfonsín tenía detrás de él una enorme fuerza, cuya capacidad era aún una incógnita: su punto fuerte fue la propuesta de construir un Estado de derecho, al cual esos poderes corporativos debían someterse, y consolidar un conjunto de reglas, capaces de atravesar los conflictos de una manera pacífica, ordenada, transparente y equitativa.

Los problemas económicos parecían menos importantes que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar la forma de representación de la voluntad ciudadana.

El gobierno atribuyó una gran importancia a la política cultural y educativa, destinada (en largo plazo) a remover el autoritarismo representado en la difundida imagen del "enano fascista" (y se refería a la parte "intolerante" que supuestamente años de dictadura habían inculcado en toda la sociedad civil). En este terreno se avanzó inicialmente con facilidad: se desarrolló un programa de alfabetización masiva, se atacaron los mecanismos

represivos que anidaban en el sistema escolar y se abrieron los canales para discutir contenidos y, lo que debía culminar en un Congreso Pedagógico que, como el de cien años atrás, determinaría qué educación quería la sociedad. En el campo de la cultura y de los medios de comunicación manejados por el Estado, la libertad de expresión, permitió un desarrollo plural de la opinión y un cierto “destape”, para algunos irritante, en las formas y en los temas. En la universidad y en el sistema científico del Estado volvieron los mejores intelectuales e investigadores, cuya migración había comenzado en 1966. Aunque en muchas universidades los cambios no fueron significativos, en otras, como la UBA, hubo profundas transformaciones la (incorporación del cbc) Estas instituciones, que debieron resolver el problema planteado por un masivo deseo de los jóvenes de ingresar a ellas, se reconstruyeron sobre la base de la excelencia académica y el pluralismo, y en algunos casos alcanzaron niveles de calidad similares a los de su época dorada, a principios de la década de 1960.

Además de volver a la vida académica, los intelectuales se incorporaron a la política .Su presencia fue habitual en los medios de comunicación. Alfonsín recurrió a ellos, como asesores o funcionarios técnicos, y su discurso política que los académicos elaboraban, resultó moderno, complejo y profundo aunque no fue el único (su compañero en ese camino fue el peronista Antonio Cafiero) y la discusión política adquirió brillo y profundidad. El punto culminante de esta modernización cultural fue la aprobación de la ley que autorizaba el divorcio vincular (un tema tabú) y posteriormente la referida a la patria potestad compartida, que avanzaba en el proyecto de modernización de las relaciones familiares, campo en el que la Argentina estaba atrasada.

**La ley sobre divorcio** fue sancionada en 1987, luego de una intensa discusión. Los sectores más tradicionales de la Iglesia católica intentaron oponerse, con los mecanismos de presión y con manifestaciones en las que hasta la Virgen de Luján fue sacada a la calle. Fracasaron, por el alto consenso existente alrededor de la nueva norma. preocupados quizá por las consecuencias de una práctica ya habitual en la sociedad En cambio, la Iglesia se movilizó con éxito alrededor del Congreso Pedagógico defendiendo ,el pluralismo y la libertad de conciencia, osea la educación privada y en contra un supuesto avance estatal.

La Iglesia, que en 1981 se había definido por la democracia y aunque no realizó crítica a la junta militar y sus prácticas genocidas, y su hostilidad con el gobierno radical fue creando un sentimiento hostil en el gobierno. Esta batalla que se dio en el ámbito cultural se amplió con los obispos locales. Enfrentando de manera creciente al gobierno radical su discurso de combate era que la democracia decían resultaba ser el conjunto de los males del siglo: la droga, el terrorismo, la pornografía y el aborto.

En cambio alfonsín el discurso ético, centrado en los valores de la democracia, la paz, los derechos humanos, la solidaridad internacional y la independencia de los Estados, bandera del país en la reinserción del país en la comunidad internacional (que había censurado y hasta aislado al régimen militar) los éxitos en este terreno, expresados en la gran popularidad alcanzada por el presidente en distintos lugares del mundo, fueron utilizados para afianzar y fortalecer las instituciones democráticas locales Con esos criterios se encararon las principales cuestiones pendientes, con Chile por el Beagle y con Gran Bretaña por las Malvinas. En el primer caso, el laudo papal, que los militares habían considerado inaceptable pero sin atreverse a rechazarlo, fue asumido como la única solución posible para el gobierno democrático, que necesitaba reafirmar los valores de la paz y eliminar un conflicto capaz de mantener vivo el militarismo. se convocó a un referéndum popular que corroboró el amplio consenso para la solución pacífica e inmediata. Aun así, la aprobación por el Senado (donde el peronismo tenía la mayoría) se logró por el mínimo margen de un voto.

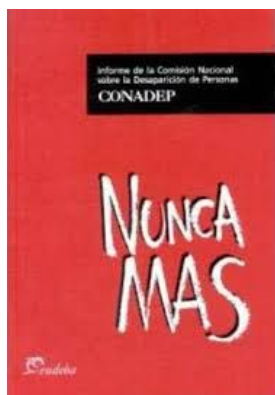
En el caso de las Malvinas, donde la torpeza militar había llevado a la pérdida de lo largamente ganado en la opinión pública internacional y en las negociaciones bilaterales, también se recuperó terreno: las votaciones en las Naciones Unidas, instando a las partes a la negociación, fueron cada vez más favorables, incluyeron a las principales potencias occidentales y aislaron al gobierno británico. Sin embargo, la expectativa de que ello sirviera para convencerlo de la conveniencia de iniciar una negociación que incluyera de alguna manera el tema de la soberanía resultó totalmente defraudada.

Argentina se asoció con otros países que acababan de retornar a la democracia (Uruguay, Brasil, Perú) Y fue mediadora en el conflicto en Centroamérica (en la cuestión de Nicaragua) Se trataba de aplicar los principios éticos y políticos generales, y también de evitar los riesgos internos que podía acarrear uno de los episodios finales de la Guerra Fría. En desacuerdo con EEUU y aprovechando su buena voluntad hacia las democracias restauradas, logró que al final se alcanzara una solución relativamente equitativa. Actuando con independencia, dialogando con los países no alineados, reivindicando los principios pero absteniéndose de los enfrentamientos más duros (por ejemplo, constituir un “club de deudores” para negociar la deuda externa) el gobierno argentino mantuvo una buena relación con el estadounidense, que respaldó con firmeza las instituciones democráticas, cortó toda vinculación con militares y apoyó los diversos intentos de estabilización de la economía.

### La corporación militar y la sindical

En el terreno cultural y en el de las relaciones exteriores, el gobierno radical pudo avanzar con facilidad, pero el camino se hizo difícil cuando afrontó los problemas de las dos grandes corporaciones cuyo pacto había denunciado en la campaña electoral: la militar y la sindical. En los dos terrenos, pronto quedó claro que el poder del gobierno era insuficiente para forzar a ambas a aceptar sus reglas.

Mientras que la sociedad, que enfurecida con los militares por su fracaso en la guerra, se enteró algo que hasta entonces había preferido ignorar: las atrocidades del genocidio, puestas en evidencia por un alud de denuncias judiciales, por los medios de comunicación y, sobre todo, por el cuidadoso informe realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), constituida por el gobierno con personalidades independientes, y presidida por el escritor Ernesto Sábato. Su texto, difundido masivamente con el título de **Nunca más** (foto), resultó irrefutable, incluso para quienes querían justificar a los militares.



Pero la inmensa mayoría los repudió en forma masiva, se movilizó y exigió justicia, amplia y exhaustiva, y castigo a los culpables.

La derrota en la guerra de Malvinas, el rotundo fracaso político, las divisiones entre las fuerzas, los propios cuestionamientos internos, todo ello debilitaba la institución militar, que, sin embargo, seguían teniendo espacios de poder.

Ante esto los militares comenzaron a justificarse en una campaña que llamaron “guerra sucia” y se reivindicaron en su supuesto logro de la victoria en la “guerra contra la subversión” Rechazando la condena de la sociedad, recordaron que su acción contó con la complicidad de políticos, empresarios, medios de comunicación y detractores, y que a lo sumo estaban dispuestos a admitir “excesos”

En los años del Proceso, el presidente Alfonsín había estado entre los más enérgicos defensores de los derechos humanos, y había hecho de ellos una bandera durante la campaña, en la que también fustigó duramente a la corporación militar. Sin duda compartía los reclamos generalizados de justicia, pero se preocupaba también por encontrar la manera de subordinar a las FFAA al poder civil, de una vez y para siempre. Para ello proponía algunas distinciones, difícil de ser aceptada por la sociedad y en particular por las organizaciones de derechos humanos: separar el juicio a los culpables del juzgamiento a la institución, que era y seguiría siendo parte del Estado, y poner límite a aquel juicio, deslindando responsabilidades y distinguiendo entre quienes dieron las órdenes que condujeron a la masacre, quienes se limitaron a cumplirlas o quienes se excedieron, cometiendo delitos aberrantes. Se trataba de concentrar el castigo en las cúpulas, sobre todo, el gobierno confiaba en que las propias FFAA se comprometieron con esta propuesta, entre las demandas de la civilidad y la postura dominante entre los militares, que asumieron la crítica de su propia acción y procedieron a su depuración, castigando a los máximos culpables. Para ello, se procedió a reformar el Código de Justicia Militar y se dispuso el enjuiciamiento de las tres primeras Juntas Militares, a las que se sumó la cúpula de las organizaciones armadas Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) (extinguida) y Montoneros.

El primer problema los militares se negaban a revisar su acción y a juzgar a sus jefes: a fin del año 1984 comenzó la resistencia en los cuarteles, y el presidente trasladó la causa a la Cámara Federal de la Capital. En abril de 1985, en un clima mucho más agitado, comenzó el juicio público de los ex comandantes. El juicio, que duró hasta fin de año, terminó de revelar las atrocidades del genocidio, aunque perdió cierto impulso la militancia civil en cambio las organizaciones defensoras de los derechos humanos hacían oír una voz cada vez más dura. Comenzaron a escucharse otras voces, hasta entonces prudentemente silenciadas, que defendieron la acción de los militares y reclamaron su amnistía.

Afin de 1985, poco después de que el gobierno ganara las elecciones legislativas, se conoció el fallo de la Cámara Penal, que condenó a los ex comandantes, negó que hubiera habido guerra alguna que justificara su acción, distinguió entre las responsabilidades de cada uno de ellos y dispuso continuar la acción penal contra los demás responsables de las operaciones. La Justicia había condenado la aberrante conducta de los jefes del Proceso, había descalificado cualquier justificación y los militares habían quedado sometidos a la ley civil. Esta circunstancia fue absolutamente increíble y en ese sentido fue un fallo ejemplar y un fundamento notable para el Estado de derecho que la democracia se proponía establecer. Pero no terminaba con el problema entre la sociedad y la institución militar, sino que lo mantenía abierto.

De ahí en más, la Justicia siguió activa, dando curso a las múltiples denuncias contra oficiales de distinta graduación, citándolos y acusándolos, La convulsión interna de las FFAA, y muy especialmente del Ejército, tuvo un nuevo eje: ya no se trataba de la situación de los citados por los jueces que eran oficiales de menor graduación y en actividad (que no se consideraban los responsables) sino los **ejecutores** de lo imputado. El gobierno, por su parte, inició un largo y desgastante intento de limitar y poner límites a la acción judicial, para así contener ese clima de efervescente en los cuarteles, que amenazaba con un alzamiento militar.

En ese contexto, el episodio de Semana Santa de 1987. Un grupo de oficiales, encabezado por el teniente coronel Aldo Rico, se acuarteló en Campo de Mayo, exigiendo una solución política a la cuestión de las citaciones y, en general, una reconsideración de la conducta del Ejército. No se trataba de los típicos levantamientos de los anteriores 50 o 60 años, pues los oficiales amotinados no cuestionaban el orden constitucional, sino que reclamaban al gobierno que solucionara el problema de un grupo de oficiales.

Que luego se materializó en las leyes llamadas de **Punto Final y de Obediencia Debida**. la primera presentada por la UCR, sancionada a fines de 1985 (ponía un límite temporal de dos meses a las citaciones judiciales) pasado el cual ya no habría otras nuevas citaciones. Dado que sancionaba la impunidad de los militares penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas de varios miles de opositores, activistas de izquierda, intelectuales, peronistas, sindicalistas, escritores, abuelas y otros grupos durante la dictadura, fue en su momento objeto de una viva y acalorada polémica. Entre 50.000 y 60.000 personas se manifestaron en el centro de BSAS como protesta contra la ley.

sus resultados terminan siendo contraproducentes, pues sólo se logró un alud de citaciones judiciales y enjuiciamientos que en lugar de aligerar el problema lo agudizaron.

Los militares, a pesar del alto grado de impunidad otorgado por el gobierno radical exigían el fin de los juicios y la libertad de los jefes militares. Este fin de semana de abril Alfonsín pactó con los militares mayor impunidad para evitar la radicalización de las masivas movilizaciones que rodearon Campo de Mayo, la Plaza de Mayo y de los Dos Congresos, donde coreaban “sí se atreven, le quemamos los cuarteles”

La civilidad no respaldó a los militares por primera vez en muchos años y que además eran responsables de la derrota en Malvinas y de la “entrega” del país a los intereses extranjeros.

Frente a ellos, la reacción de la sociedad civil fue unánime y masiva. Todos los partidos políticos y todas las organizaciones de la sociedad (patronales, sindicales, culturales, civiles de todo tipo) manifestaron activamente su apoyo al orden institucional, firmaron un Acta de Compromiso Democrático (que incluía desde las organizaciones empresarias hasta a los dirigentes de izquierda) y rodearon al gobierno. La reacción masiva e

instantánea permitió evitar la posibilidad de apoyo civil a los amotinados. La civilidad se movilizó, llenó las plazas del país y se mantuvo en vigilia durante los cuatro días que duró el episodio. Muchos de ellos estaban dispuestos a marchar sobre Campo de Mayo. La tensión social fue intensa, Alcanzó para detener un ataque directo a la democracia, pero no fue suficiente para lograr que los militares se doblegaran ante la sociedad.

Aunque el motín trajo pocas adhesiones entre los militares, en el fondo los militares habían acordaban con sus camaradas “carapintadas”: ninguno de ellos estuvo dispuesto a disparar un tiro para obligarlos a deponer su actitud, Una actitud bastante ambigua.

Durante las cuatro tensas jornadas hubo muchas negociaciones, pero éstas no se concretaron hasta que Alfonsín (quien encabezaba la gran concentración cívica de Plaza de Mayo) se entrevistó con los amotinados en Campo de Mayo. y Se llegó a un extraño acuerdo.

pero como resultado de la negociación se produjo la sustitución del General Héctor Ríos Ereñú como Jefe del Estado Mayor por el General José Dante Caridi y poco después el envío al Congreso del proyecto de Ley de Obediencia Debida, que sería aprobado por ambas Cámaras y promulgada finalmente el 8 de junio de 1987, en medio de grandes debates. Se trató de un episodio que puso en riesgo a las instituciones democráticas, modificando el panorama de la política nacional.

Hubo un desencanto generalizado y el fin ilusión se concretó la sociedad no era incapaz de doblegar a los militares. Y una idea de una democracia débil era el pensamiento colectivo potenciado con un gobierno incapaz de resolver de manera digna el enfrentamiento con el Ejército.

**El poder de los sindicalistas**, (restaurado en parte al final del gobierno militar) se hallaba debilitado por la derrota electoral del peronismo a lo que debía sumarse la profunda división existente entre los dirigentes. Por otra parte, su situación era institucionalmente precaria muchos sindicatos estaban intervenidos, y en otros los dirigentes sólo tenían títulos provisionales, de modo que la normalización sindical debía ser inmediata.

El gobierno se propuso aprovechar esa debilidad relativa, El ministro Antonio Mucci (veterano sindicalista de origen socialista) proyectó una ley de normalización institucional de los sindicatos que incluía el voto secreto, directo y obligatorio, la representación de las minorías, la limitación de la reelección y, sobre todo, la fiscalización de los comicios por el Estado. Se trataba de un desafío frontal, ante el cual se unificaron todas las corrientes del peronismo, gremial y político: en marzo de 1984 la ley fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero el Senado la rechazó. De inmediato el gobierno comenzó la negociación con los gremialistas y acordó con ellos nuevas normas electorales. A mediados de 1985 se habían normalizado los cuerpos directivos de los sindicatos, y aunque las listas de oposición habían ganado algunos lugares.

Entre 1984 y 1988, la CGT organizó trece paros generales, en junio de 1985, la presión de la CGT fue intensa. Se apoyó en las indudables tensiones sociales generadas por la inflación (que llevaba a una permanente lucha por mantener el salario real) y más tarde en los comienzos del ajuste del sector estatal, que movilizó particularmente a los empleados públicos. Pero su carácter fue predominantemente político. Los sindicalistas lograron expresar de manera unificada el descontento social, e integrar a sectores no sindicalizados, como los jubilados, pero también establecieron alianzas tácticas con los empresarios, la Iglesia y los grupos de izquierda. Los reclamos incluían pedidos de ruptura con el Fondo Monetario Internacional (FMI)-, pero se unificaban en un común ataque contra el gobierno, que incluyó en algún momento de exaltación el reclamo de que “se vayan”.

La CGT no rehusó participar en las instancias de concertación que abrió el gobierno, pero lo hizo con el estilo que había desplegado exitosamente entre 1955 y 1973 al estilo vanderista: negociar y golpear, conversar y abandonar la negociación con un “portazo”, Su secretario general, Saúl Ubaldini(foto), proveniente de un pequeño sindicato, fue la figura característica de esta etapa, no sólo por su peculiar estilo político, adecuado para sellar el arco de alianzas del mundo del trabajo y la pobreza, sino sobre todo porque su escasa fuerza propia lo convertía en punto de equilibrio entre las distintas corrientes en que se dividía el sindicalismo.

El gobierno, que abrió permanentemente los espacios para el diálogo y la concertación, pudo resistir bien el fuerte embate sindical, pese a los inconvenientes que significaba para la estabilización económica, en tanto

contó con el apoyo consistente de la civilidad y A principios de 1987 la apertura de distintos frentes de oposición, y muy particularmente el militar, impulsaron al gobierno a una maniobra audaz: concertar con un grupo importante de sindicatos (los "15", que incluían a los más importantes de la actividad privada y de las empresas



del Estado) y nombrar a uno de sus dirigentes en el cargo de ministro de Trabajo. El acuerdo era transparente, e incluía la sanción del conjunto de leyes que organizaba la actividad sindical (de asociaciones profesionales, de convenciones colectivas, de obras sociales, controladas por los sindicatos) A cambio de esas importantes concesiones, el gobierno obtenía poco: una relativa tregua social, pues la oposición sindical quedó profundamente dividida, y un eventual apoyo político, que nunca se concretó. Quizá, también, un respaldo frente al embate de la corporación militar, que no debía darse por descontado. Luego de la

victoria del peronismo en la elección de septiembre de 1987, los sindicalistas abandonaron el gobierno. Pero con la nueva legislación, el poder de la corporación sindical quedaba reconstituido por completo y la ilusión de la civilidad democrática de someterlos a sus reglas se desvanecía.

### El Plan Austral, la inflación y la crisis del Estado

La cuestión económica, que al principio pareció mucho menos urgente que los problemas políticos, era extremadamente grave y condicionó las políticas del gobierno. La inflación, un problema crónico que se aceleró desde 1982 y Junto con el déficit fiscal y la deuda externa, que seguía creciendo, constituía la parte más visible del problema. Se prolongaba en una economía estancada desde principios de la década, cerrada e ineficiente y muy vulnerable en lo externo. Escaseaban las inversiones y los grupos económicos más concentrados (que absorbían una buena porción de los recursos del Estado) podrían bloquear los intentos que el gobierno hiciera para modificar su situación privilegiada.

El flujo de capitales se había cortado desde 1981, pero la deuda externa siguió creciendo por la elevación de los intereses, y al fin de la década se duplicó. El Estado, que en 1982 había estatizado la deuda privada, en dólares (cavallo) Esas obligaciones se refinanciaban con frecuencia, pero sólo cuando se contó con la buena voluntad del FMI, que a cambio presionaba para la adopción de políticas que priorizan la capacidad de pago (ajustes) El pago de los servicios era un componente muy importante del déficit fiscal. Y se abrió un debate económico importante por un lado los críticos liberales (escuchados por los empresarios) culpaban a la emisión monetaria, gastos sociales y a los gastos del estado excesivos(particularmente en el empleo).

Otros proponían ahorrar en subsidios a los sectores empresariales (como políticas de promoción a empresas)

El Estado tenía poco crédito externo, y el interno escaseaba porque todo el mundo transformaba sus ahorros en dólares. El Estado sólo podía salir del paso emitiendo dinero, lo que producía más inflación, distorsionaba la economía, afectaba la recaudación fiscal y, finalmente, la propia capacidad del Estado.

Durante el primer año del gobierno radical, la política económica del ministro Bernardo Grinspun se ajustó a las fórmulas redistributivas clásicas, que compartía con el peronismo histórico. La mejora en la remuneración de los trabajadores, junto con créditos ágiles a los empresarios medios, sirvió para la reactivación del mercado interno y la movilización de la capacidad del aparato productivo. La política incluía el control estatal del crédito, el mercado de cambios y los precios, y se completaba con importantes medidas de acción social, como el Programa Alimentario Nacional (**PAN**), que proveyó de las necesidades mínimas a los sectores más pobres, afectados por la recesión y el desempleo. Con todo ello se apuntaba a mejorar la situación de los sectores medios y populares y a satisfacer las demandas de justicia y equidad social, que habían sido banderas en la campaña electoral.



Pero empresarios y sindicalistas coincidieron en la crítica a esta política. La CGT se movilizó tanto por razones sindicales como políticas, Aunque sus acuerdos eran mínimos, coincidieron en hacer fracasar la política de concertación sectorial a la que habían apostado Grinspun y su equipo.

El gobierno debió afrontar al sindicalismo y corporativismo y la puja desatada por la distribución del ingreso, que la inflación agudizaba. Y cada vez era más clara la inoperancia política para terminar con el déficit fiscal e inflación y el deterioro del aparato productivo y su incapacidad para reaccionar ante los estímulos de la demanda. Con la deuda externa, se trató de lograr la buena voluntad de los acreedores, con el argumento de que las jóvenes democracias debían ser protegidas, y también se los amenazó con la constitución de un “club de deudores” latinoamericano, que repudiara la deuda en conjunto. Ambos resultaron igualmente inconducentes.

A principios de 1985, cuando la inflación amenazaba desbordar en una hiperinflación, la conflictividad social se agudizaba y los acreedores externos hacían sentir en forma enérgica su disconformidad, el presidente Alfonsín reemplazó a su ministro de Economía por Juan Sourrouille, un economista recientemente acercado al radicalismo,



que lo acompañó casi hasta el final de su gobierno. Por esos meses se sumó otro elemento conflictivo: la agitación militar, en vísperas del inicio del juicio a las Juntas. A fines de abril se denunció un posible intento de golpe de Estado contra la frágil democracia: la civilidad, convocada a la Plaza de Mayo para defender al gobierno, recibió el sorpresivo anuncio del inicio de una “economía de guerra”. El 14 de junio de 1985, Sourrouille anunció el nuevo plan económico, bautizado como Plan Austral.

Su objetivo era estabilizar la economía en el corto plazo a través de un fuerte shock, de modo de crear las condiciones para poder proyectar transformaciones más profundas. Lo primero era detener

la inflación, reduciendo las expectativas inflacionarias que la impulsaban. Se congelaron simultáneamente precios, salarios y tarifas de servicios públicos, se regularon los cambios y las tasas de interés, se suprimió la emisión monetaria para equilibrar el déficit fiscal y se eliminaron los mecanismos de incremento en bienes o servicios y se cambió la moneda y el peso argentino fue reemplazado por el austral (foto).

El ministro Sourrouille estuvo acompañado por un equipo técnico externos a la UCR y con un apoyo de la sociedad, pues pronto logró frenar la inflación, sin afectar específicamente a ningún sector. No hubo caída de la actividad ni desocupación, que con frecuencia acompañaban los planes de estabilización, pero tampoco se afectó a los sectores empresariales. El ajuste fiscal fue sensible pero no dramático: los salarios de los empleados estatales fueron congelados más estrictamente que los del sector privado, pero no hubo despidos; la recaudación mejoró, por la fuerte reducción de la inflación, sumado a algunos impuestos excepcionales, aunque no hubo drásticas reducciones en los gastos del Estado. Los acreedores externos apreciaron la manifiesta intención del gobierno de cumplir los compromisos, la mejora de las finanzas estatales y, sobre todo, el firme apoyo que el plan recibió tanto del gobierno estadounidense como de las principales instituciones financieras mundiales. También fue apoyado por el sector empresarial, El gobierno mantuvo todos los mecanismos de promoción y agregó otros nuevos, para estimular las exportaciones industriales, cuyo incremento debería ayudar a mejorar el balance de pagos. A cambio esperaba su colaboración para mantener estables los precios, y también que repatriaron sus capitales y los invirtieron en el país.

Se trataba del “plan de todos”, quizá la más pura de las realizaciones de la ilusión democrática: entre todos, con solidaridad y sin dolor, se podían solucionar los problemas más complejos, aún aquellos que implican choques de intereses más profundos. El gobierno obtuvo su premio en las elecciones parciales de noviembre de 1985: (apenas seis meses después de que el país estuviera al borde del caos) logró un claro éxito electoral que significaba el apoyo general de la civilidad a la política económica.

La felicidad duró poco. Ya desde fines de 1985, volvió la inflación, que el gobierno debió reconocer en abril de 1986 con un “sinceramiento” y ajuste parcial. Influyó el derrumbe de los precios mundiales de los cereales, que obligó al Estado a eliminar una fuente de ingresos (las retenciones a las exportaciones) pues los productores rurales estaban al borde de la ruina. Tampoco hubo inversiones de los empresarios, que aceptaron los beneficios recibidos sin dar mucho a cambio. Renacieron las pujas sectoriales, que realimentaron la inflación: la CGT se movilizó contra el congelamiento de precios. La reaparición tan rápida de los viejos problemas indicaba que, en el fondo, nada había cambiado. El plan, eficaz para la estabilización rápida, no dio resultado.

El gobierno exploró distintos caminos para atacar el problema. Se intentó reactivar la inversión extranjera, especialmente en el área petrolera (el presidente Alfonsín anunció este plan en Houston) y también se crearon planes de reforma fiscal más profunda y de desregulación de la economía (quitar normas). Todo ello chocaba con ideas y convicciones muy firmes en la sociedad, arraigadas tanto en el peronismo como de la misma UCR cualquiera de estos rumbos hubiera significado, a diferencia del Plan Austral, enfrentarse con alguno de los fuertes intereses constituidos, o también hacer cargar al grueso de la sociedad con los costos de la reforma. A medida que el gobierno buscaba hacer frente a las reformas descubría su apoyo disminuían.

Los proyectos reformistas estaban en sintonía con los reclamos del FMI y también con el ánimo crecientemente liberal de los empresarios.

En abril de 1987 los militares desafiaron al poder civil, no encontraron ningún apoyo en la sociedad. En cierto sentido, la institucionalidad democrática se salvó. Los sindicalistas reforzaron su poder y neutralizaron los proyectos de flexibilización laboral, alentados por los empresarios.

Éstos empresarios lograron ventajas específicas, como la participación en la explotación de las reservas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Pero no acompañaron otras reformas, como la privatización de las empresas públicas, y se mantuvieron acorde a sus privilegios particulares.

En septiembre de 1987, luego de la derrota electoral, la posición del gobierno se debilita aceleradamente. En noviembre el peronismo, optimista a un buen resultado en las elecciones presidenciales de 1989, se negó a respaldar reformas que tengan un desgaste social. y la reconciliación de Alfonsín con las corporaciones, creó un fuerte deterioro de la imagen del gobierno, tampoco rindió los frutos en el terreno económico, donde la inestabilidad y la sensación de falta de gobernabilidad fueron crecientes.

## **LA APELACIÓN A LA CIVILIDAD**

Inicialmente el gobierno radical sólo había sido tolerado por las grandes corporaciones de modo que debía respaldarse en su poder institucional. Pero allí también su apoyo era limitado, en particular en el Congreso: la mayoría que tuvieron los radicales en la Cámara de Diputados hasta 1987 se contrapesaba con la mayoría relativa de los peronistas en el Senado, así los dos grandes partidos tenían mayoría en el Congreso - que debía ser el corazón del nuevo sistema democrático, la posibilidad de vetarse recíprocamente y sin acuerdos entre estos hacia las cosas más difíciles cuando uno era oficialismo y el otro oposición.

Esta situación le costó al gobierno un fuerte apoyo para encarar los problemas de la crisis,

Los grandes apoyos del gobierno se encontraban en el radicalismo y en el amplio conjunto de la civilidad que directa o indirectamente lo había respaldado. Se trataba de un actor político nuevo, mucho más inestable potenciado por las circunstancias de la crisis del régimen militar, tuvo un gran poder pero. En realidad, se trataba de un partido complejo y fragmentario, en el que coexistían variadas tendencias y donde se representaban múltiples intereses, difícil de unificar.

Desde 1983 Raúl Alfonsín estableció un fuerte liderazgo, capitalizando el apoyo que había ganado en la civilidad. Su agrupación interna el Movimiento de Renovación y Cambio (que fundó en 1972 cuando disputaba la conducción con Ricardo Balbín) también fue notable la acción de un grupo de dirigentes jóvenes, provenientes en su mayoría de la militancia universitaria, que integró la Junta Coordinadora Nacional, la “Coordinadora”. Surgido hacia 1968, el grupo conservaba rasgos de la etapa anterior a 1975: confluencia de tradiciones socialistas y



antiimperialistas estas aportaron cuadros tanto para la lucha partidaria como para la administración del país, que sobresalieron por su disciplina, su eficacia y también su pragmatismo para tejer alianzas que trajero disidencias dentro del mismo partido.

El pacto entre Alfonsín y la civilidad se selló en la campaña electoral de 1983, con los actos masivos y con la fe común en la democracia como panacea (un mítico remedio que cura todas las enfermedades)

Alfonsín siguió utilizando esa movilización, convocando para resolver la cuestión del Beagle, trabajó intensamente en su educación, en la constitución de la civilidad como actor político maduro y consciente. Para la movilización callejera (un estilo político emparentado con el peronismo) él se propuso los grandes temas y las grandes metas. La lucha contra el autoritarismo y por la democratización cubrió la primera fase de su gobierno. Pero desde el Plan Austral, y sobre todo luego del triunfo electoral de noviembre de 1985, su discurso se orientó hacia los temas del pacto democrático, la participación y la concertación, y hacia la nueva meta de la modernización, y se manifestaron en una serie de reformas concretas, que propuso: la reforma del Estado, el traslado de la Capital al sur o la reforma constitucional, no concretadas pero logró mantener la iniciativa en la discusión pública.

Las frágiles bases de su poder residían en la coherencia y la tensión de esa civilidad que lo había consagrado presidente. Sus limitaciones pasaban por ser fiel al pacto inicial, pronto corroído por las fuerzas armadas la falta de consenso para apelar al parlamento, los actores sociales como la puja con la iglesia o poca participación del sector corporativo.

Un conjunto de fuerzas provenientes de la izquierda se núcleo en torno del Partido Intransigente (PI), con un programa que se ubicaba en el mismo terreno que el del alfonsinismo (la defensa de los derechos humanos, la reivindicación de la sociedad y la democracia), aunque agregaba consignas nacionalistas y antiimperialistas, aplicadas a la cuestión de la deuda externa.(rechazo al FMI) con las las consignas de los derechos humanos, al tiempo que el antiimperialismo le permitía acercarse con aquellos sectores del sindicalismo que levantaron la bandera del repudio a la deuda externa. No lograron, constituir un polo alternativo: el PI se disgregó y fue absorbido por el peronismo renovado.

A la derecha, creció la Unión del Centro Democrático (uceDé), fundada por Álvaro Alsogaray, el veterano mentor de las ideas liberales. Cuyas ideas eran antagónicas al estado de bienestar inspirado por la crisis soviética. no logró afirmarse más allá de la Capital, aunque pudo aspirar a convertirse en la tercera fuerza, que arbitra entre radicales y peronistas. Que influenció en el radicalismo a medida que la crisis económica ponía de relieve la necesidad de soluciones de fondo y disponía de recetas fáciles y atractivas (pero macabras para la sociedad)y marcando una diferencia del estatismo e intervencionismo del estado.

En contraparte herminio iglesias un dirigente combativo del peronismo (al que se le atribuye la derrota electoral de 1983, tras quemar un ataúd con la sigla UCR en un acto visto por tv por miles de personas) quiso ser oposición al radicalismo oponiéndose al acuerdo con Chile, la derrota terminó con su carrera en el PJ. pero fue creciendo una corriente opuesta a este en la renovación del peronismo cuyas figuras eran Antonio Cafiero y el gobernador de la Rioja Carlos Menem que acompañaron a alfonsín con el plebiscito del Beagle, los alzamientos de los carapintados en la semana santa de 1987 que luego los dirigentes renovadores manifestaron una solidaridad con la institucionalidad democrática y respaldaron sin condiciones al gobierno. Y ponían al peronismo en la senda democrática, sino que, finalmente, parecían crear la condición de una posible alternancia entre partidos políticos.

### **El fin de la ilusión**

El año 1987 fue decisivo para el gobierno de Alfonsín. El episodio de Semana Santa representó la culminación de la participación de la civilidad, el máximo de tensión que se podía alcanzar, y al mismo tiempo la evidencia de su limitación para doblegar a los militares. En la Pascua de 1987, Alfonsín perdió la exclusividad del liderazgo sobre la civilidad. En un clima de deterioro económico agudizado y de inflación galopante, las elecciones de septiembre de 1987 les dieron un triunfo al PJ e importante en términos de poder: el radicalismo perdió la mayoría en la

Cámara de Diputados y el control de todas las gobernaciones, con excepción de las de Córdoba y Río Negro, únicos distritos, junto con la Capital Federal, en los que logró triunfar.

El gobierno sintió fuertemente la derrota que cuestionaba su legitimidad y su capacidad de gobernar, y desde entonces hasta que traspasó el mando, en julio de 1989, las dificultades para su gestión fueron crecientes, hasta llegar a convertirse en un calvario. El plan austral le dio un momentáneo respiro, sobre todo cuando el PJ acompañó dichas medidas. Pero no acompañó al gobierno en las transformaciones, como el programa de privatización de empresas estatales que le quitó credibilidad y demostraron los signos de la crisis que no terminaban (fuerte inflación, incapacidad para afrontar los pagos de la deuda externa) y dentro de la UCR reaparecieron voces en contra de alfonsín quien propuso como candidato presidencial para 1989 al gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, más tradicionalista y poco identificado con las tendencias del alfonsinismo.

La cuestión militar, no cerrada en abril de 1987, tuvo dos nuevos episodios, en parte porque la situación de los oficiales seguía irresuelta, pero sobre todo porque los estaban dispuestos a aprovechar la debilidad del gobierno. En enero de 1988, el teniente coronel Aldo Rico, jefe de aquel alzamiento, huyó de su prisión y volvió a sublevarse en un lejano regimiento en el nordeste. A diferencia del año anterior, la movilización civil fue mínima y el respaldo de los militares también fue escaso: Rico fue perseguido por el Ejército, y luego de un breve combate, se rindió y fue encarcelado en un establecimiento penal.

A fines de 1988, hubo una nueva sublevación, encabezada por el coronel Mohamed Alí Seineldín (foto), que como



Rico pertenecía al grupo de los denominados “héroes de las Malvinas”, y a quienes todos indicaban como el verdadero jefe de los “carapintadas”. Seineldín se sublevó en un regimiento próximo a la Capital, reclamando amnistía y relevamiento en las cúpulas militares, el Ejército, se negaron a reprimir, compartían sus ideas y hasta hacían suyo su programa. Como en Semana Santa, y pese a que los amotinados terminaron en prisión, el resultado final fue incierto. En definitiva, el proyecto de reconciliar a la sociedad con las FFAA había fracasado. Aquella se sentía del todo ajena a las inquietudes de los “carapintadas”, y aun quienes tradicionalmente habían apelado a los militares repudiaban su actitud subversiva y

el nacionalismo que demostraban,

En enero de 1989 un grupo terrorista, autodenominados Movimiento Todos por la Patria (MTP), liderados por Enrique Gorriarán Merlo, escaso en número, pobre en recursos, aislado y trasnochado, asaltó el cuartel de La Tablada en el Gran Buenos Aires, y el Ejército encontró la ocasión para realizar una aplastante demostración de fuerza, que culminó con el aniquilamiento de los asaltantes. Resultaron muertos 32 guerrilleros, 9 militares y 2 policías.<sup>78</sup> Cuatro guerrilleros fueron detenidos-desaparecidos por las fuerzas gubernamentales, cuya suerte nunca fue revelada por el Estado argentino. El reconocimiento que recogió por la acción fue el primer indicio del cambio de prioridades y valores en la opinión pública. Podía anticiparse que finalmente la cuestión militar abierta llevaría a la reivindicación de los militares, el olvido de los crímenes de la “guerra sucia” y el entierro de las ilusiones de la civilidad, aunque le tocaría al gobierno de Menem dar el gran paso de amnistiar a los jefes condenados.

Luego de la elección de septiembre de 1987 creció la figura de Antonio Cafiero, gobernador de Buenos Aires, presidente del Partido Justicialista y jefe del grupo renovador, que se perfilaba como probable sucesor de Alfonsín. Cafiero era partidario del respeto a la institucionalidad republicana, combinada con un persistente movimientismo; propuestas modernas y democráticas, elaboradas por sectores de intelectuales; distanciamiento

de las grandes corporaciones, y establecimiento de acuerdos mínimos con el gobierno para asegurar el tránsito ordenado entre una presidencia y otra.

Quizás eso los perjudicó frente a su competidor dentro del peronismo: el gobernador de La Rioja, Carlos Menem, también enrolado en la renovación, pero cultor de un estilo político mucho más tradicional. Menem demostró una capacidad para reunir en torno suyo diferentes segmentos del peronismo, desde los dirigentes sindicales, rechazados por Cafiero, hasta antiguos militantes de la extrema derecha o izquierda de los años setenta, junto con caudillos o dirigentes locales desplazados por los renovadores, como Eduardo Duhalde, que le construyó una sólida base electoral en la provincia de BSAS, explotando su figura de caudillo tradicional para diferenciarse de sus rivales modernizadores, y sin necesidad de precisar una propuesta o programa, ganó la elección interna (realizada mediante el voto directo de los afiliados) en julio de 1988 quedó consagrado candidato a presidente.

En los meses siguientes extendió y perfeccionó su fórmula. Se familiarizó con las propuestas neoliberales y se vinculó con el grupo Bunge y Born. Tejió en privado sólidas alianzas con los dirigentes de la Iglesia y los oficiales de las FFAA, incluyendo a los “carapintadas”. Pero en público apeló al mundo de “los humildes”, a quienes se dirigió con un mensaje de estilo mesiánico, con un despliegue escenográfico que resaltaba su figura de **santón**, en el que la “revolución productiva” y el “salariazó” pre anunciaban la entrada en la tierra de promisión. Si en el voluntarismo se acercaba al estilo de Alfonsín, todo lo demás lo diferenciaba, al tiempo que testimoniaba la realidad de una sociedad que estaba emergiendo, dominada por la miseria un discurso diseñado para ganar.

El gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, su competidor, trató de capitalizar el temor que suscitaba el populismo de Menem y también intentó captar al electorado que criticaba las facetas más progresistas de Alfonsín. Por ello, se acercó a las propuestas neoliberales, y mientras Menem prometía volver al paraíso de la distribución, Angeloz anticipaba un recorte del gasto fiscal, que simbolizaba con un lápiz rojo dispuesto a tachar todo rubro innecesario.

Todo indicaba que la alternancia de partido estaba en progreso, pero en agosto de 1988 el gobierno lanzó un nuevo plan económico, que denominó “**Primavera**”, con el propósito de llegar a las elecciones con la inflación controlada, pero sin realizar ajustes que pudieran perjudicar a la población, se dispuso el congelamiento de precios, salarios y tarifas (aceptado por los empresarios), se agregó la declarada intención de reducir el déficit estatal, condición para lograr financiación del FMI, el plan fue rechazado por los sindicatos estatales; la negociación con las entidades financieras externas se desaceleró y los fondos prometidos eran escasos, en cambio lo hicieron los capitales especulativos, para aprovechar la diferencia entre tasas de interés elevadas y cambio fijo, contando con retornar en cuanto se anunciara la posibilidad de una devaluación.

Se trataba de una situación explosiva, que reposaba exclusivamente sobre la capacidad del gobierno para mantener la paridad cambiaria. En diciembre de 1988 simultáneo al alzamiento de seinfeldín le siguió una aguda crisis en el suministro de electricidad y, poco después, el asalto al cuartel de La Tablada. Por entonces el Banco Mundial y el FMI limitaron sus créditos al gobierno argentino. Este anuncio hizo que la economía se derrumbara. El 6 de febrero de 1989, el gobierno anunció la devaluación del austral (que devoró la fortuna o los ahorros de quienes no supieron retirarse a tiempo, incluyendo a importantes grupos empresarios) e inició un período en que el dólar y los precios subieron vertiginosamente y la economía entró en descontrol. Luego de largos períodos de alta inflación, había llegado la hiperinflación, que destruyó el valor del salario y de la moneda misma y afectó la producción y la circulación de bienes.

En ese clima se votó el 14 de mayo de 1989. El Partido Justicialista obtuvo un rotundo triunfo y Carlos Menem quedó consagrado presidente. La fecha prevista para el traspaso era el 10 de diciembre, pero pronto fue evidente que el gobierno saliente no estaba en condiciones de gobernar hasta esa fecha. A fines de mayo la hiperinflación tuvo sus primeros efectos dramáticos: asaltos y saqueos a supermercados, duramente reprimidos. Poco después, Alfonsín renunció, para anticipar el traspaso del gobierno, que se concretó el 9 de julio, seis meses antes del plazo constitucional. La imagen de 1983 se había invertido, y quien había sido recibido como la expresión de la regeneración deseada se retiraba acusado de abandonar el gobierno e incapacidad de gobernar.